



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Blanca Nury Londoño Castrillón
INTERVINIENTE	Viviana Marcela Ortiz Londoño
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-009-2019-00036
TEMA	Pensión de sobrevivientes
DECISIÓN	Revoca sentencia

El quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **046** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **BLANCA NURY LONDOÑO CASTRILLÓN** y como interviniente excluyente, **VIVIANA MARCELA ORTIZ LONDOÑO**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, en el proceso con radicado **05-001-31-05-009-2019-00036**.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos de la sustitución de poder conferido por el doctor SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, en calidad de representante legal para procesos de COLPENSIONES de la firma MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S., de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería para actuar al Dr. DARIO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO, identificado con cédula de ciudadanía N.º 80.845.672, y portador de la tarjeta profesional N° 271.442 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de COLPENSIONES.

- **PRETENSIONES:**

La demandante pretende que condene a la entidad accionada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge, con ocasión a la muerte del señor ABSALÓN ORTIZ ZAPATA.

Como consecuencia se condene a COLPENSIONES a que reconocer y pagar la pensión de sobreviviente, aplicando la condición más beneficiosa, a partir del 10 de mayo de 2014, más las mesadas causas y sigan causando, y los reajustes de ley, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación de cada una de las sumas adeudadas y las costas procesales.

- **HECHOS:**

La demandante sustenta las anteriores pretensiones manifestando que contrajo matrimonio católico con el señor ABSALÓN ORTIZ ZAPATA, el 6 de agosto de 1983. Que de ese matrimonio procrearon dos hijos, ya mayores de edad. Que el señor ABSALÓN ORTIZ ZAPATA falleció el 10 de mayo de 2014, estando con la calidad de afiliado en el RPM. Que solicitó a COLPENSIONES el 14 de febrero de 2018, el reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente, la cual fue negada mediante resolución 88877 del 5 de abril de 2018, por no haberse acreditando las 50 semanas dentro de los 3 últimos años antes de la muerte, por lo que se dejó plasmado que podía optar por indemnización sustitutiva. Que interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el acto administrativo que le negó la pensión. Que el causante en la historia laboral cuenta con 736 semanas, reuniendo al 1° de abril de 1994, 496 semanas. Que al momento de la muerte del señor ORTIZ ZAPATA se encontraba cotizando y tenía más de 26 semanas en toda su vida laboral, por lo que también causó el derecho bajo la ley 100 de 1993. Y que a través de las resoluciones 122643 del 8 de mayo de 2018 y DIR 9732 del 21 de mayo del mismo año, dan respuesta desfavorable a los recursos interpuestos.

- **CONTESTACIÓN:**

Frente a los hechos de la demanda expuso que no le consta el matrimonio del falleció con la demandante, ni los hijos que procrearon, ni ningún hecho ajeno a la entidad. Que es cierta la fecha de fallecimiento del señor ABSALON ORTIZ. Que es cierto que realizó aportes al RPM y que contaba con la calidad de afiliado. Que es cierta la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes de la demandante elevada el 14 de febrero de 2018, a la cual se le dio repuesta negativa por no cumplir con las semanas. Que es cierto que presentó recurso de reposición en subsidio el de apelación, resolviéndose los mismos. Que es cierto que el fallecido contaba con 736 semanas. Y frente a los demás hechos, indica que no son hechos sino una apreciación de la parte actora. Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones. Y planteó varias excepciones de mérito.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 23 de febrero de 2021, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** prospera la excepción de inexistencia de la obligación, y como consecuencia, **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de la pensión de sobrevivientes solicitada por la demandante acogiendo también la misma decisión para la tercera excluyente; como argumento de su decisión, expuso que el causante no logró reunir las semanas exigidas, para dejar causado el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes bajo la ley 797 de 2003, como tampoco en aplicación de la condición más beneficiosa en lo que se refiere solamente a la norma anterior, es decir, la ley 100 de 1993.

Y, **CONDENÓ** en costas procesales a la parte actora.

- **APELACIÓN:**

✓ DEMANDANTE:

La parte actora interpuso recurso de apelación indicando que se debe revocar la sentencia proferida, apartándose de los argumentos presentados por el juez, en la medida que acoge los argumentos de la Corte Suprema de Justicia y se aparta de los argumentos de la Corte Constitucional; por lo que solicita acoger los argumentos de la Corte Constitucional, sobre la condición más beneficiosa

en pensiones de sobrevivientes, ya que esta Corte se ha pronunciado de manera favorable en sentencias de tutela, como en la sentencia SU-442 de 2016, en donde se refleja que se debe reconocer y pagar pensión de sobrevivientes teniendo como norma aplicable el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Que siempre se tiene que pretender proteger los derechos al mínimo vital, igualdad, y a la seguridad social integral. Que se debe tener en cuenta que el señor ABSALÓN ORTIZ, dejó causado el derecho a la prestación económica, toda vez que cotizó un total de 736 semanas, de las cuales al 1° de abril 1994 había cotizado 496, es decir tenía más de las 300 semanas que exige el artículo 6 del decreto 758 de 1990. Que adicionalmente el causante al momento de su muerte se encontraba cotizando, por lo que, contando con más de 26 semanas cotizadas en toda su vida laboral, reuniendo también los requisitos de la ley 100 de 1993. Que se debe tener en cuenta que la demandante cumple con todos los requisitos establecidos en la sentencia SU-005 de 2018, ya que la demandante pertenece a un grupo de especial protección, ya que tiene actualmente 59 años de edad, no tiene bienes o rentas que le permitan solventar su propia subsistencia ni su mínimo vital, por lo que tiene que acudir a la ayuda de sus hijos, los cuales no tienen ingresos fijos o elevados. Que, en cuanto a la segunda condición, la ausencia de la pensión de sobrevivientes si afecta su mínimo vital, pues no tiene fuentes de ingreso que le permita derivar su subsistencia. Que en lo que respecta a la tercera condición, de las pruebas testimoniales y documentales, se puede ver que la actora siempre dependió del causante, ya que nunca ha laborado, pues siempre fue ama de casa. Que con respecto a la cuarta condición, se tiene que acudir a la labor realizada por el causante, la cual era la de construcción, en donde algunas empresas no se le realizaban la afiliación al sistema pensional. Y que, frente a la última condición, la demandante fue diligente en sus reclamaciones.

- **ALEGATOS:**

- ✓ **COLPENSIONES:**

Presentó sus alegatos, señalando que se debe confirmar la decisión de primera instancia, pues si bien la demandante pretende que se le reconozca y pague pensión de sobreviviente aplicando el principio de condición más

beneficiosa, toda vez que el causante no dejó causado el derecho al no cumplir los requisitos de la ley 797 de 2003, norma vigente a la fecha de fallecimiento, no se le puede aplicar el decreto 758 de 1990, ya que sería una aplicación ultractiva de la norma, lo que no sería válido para el caso de estudio.

## CONSIDERACIONES

Antes de resolver los problemas jurídicos, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Copia de la partida de matrimonio del señor ABSALON ORTIZ ZAPATA y la señora BLANCA NURY LONDOÑO CASTRILLÓN, en donde se corrobora que el acto religioso se celebró el 6 de agosto de 1983.<sup>1</sup>
- Registro civil de defunción, en donde se certifica que el señor ABSALON ORTIZ ZAPATA, falleció el **10 de mayo de 2014**.<sup>2</sup>
- Resolución SUB 88877 del 5 de abril 2018, a través de la cual COLPENSIONES, negó la pensión de sobrevivientes a la demandante, por no haberse dejado causado el derecho, al no cumplir el causante con el requisito de semanas de la ley 797 de 2003, así como tampoco dando aplicación a la condición más beneficiosa, realizando el estudio bajo la ley 100 de 1993.<sup>3</sup>
- Resolución SUB 122643 del 8 de mayo de 2018, por medio de la cual COLPENSIONES resuelve recurso de reposición, y decide confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución 88877 de 2018.<sup>4</sup>
- Resolución DIR 9732 del 21 de mayo de 2018, a través de la cual COLPENSIONES resolvió el recurso de apelación, y confirmó la resolución 88877 de 2018.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Folio 21

<sup>2</sup> Folio 22

<sup>3</sup> Folios 24 a 31

<sup>4</sup> Folios 35 a 42

<sup>5</sup> Folios 43 a 50

- Historia laboral del señor ABSALON ORTIZ ZAPATA.<sup>6</sup>
- Documento en donde la señora VIVIANA MARCELA ORTIZ LONDOÑO<sup>7</sup>, señala **que no se encuentra interesada en intervenir en el proceso ni presentar demanda en calidad de interviniente**, toda vez que para la fecha de la muerte de su padre contaba con 23 años de edad y no se encontraba estudiando, y es por tal razón, que afirma que la única beneficiaria es la señora BLANCA NURY LONDOÑO.<sup>8</sup>

De acuerdo con lo anterior, los **problemas jurídicos** a resolver de conformidad con el recurso interpuesto, será determinar: **i)** si el afiliado fallecido, el señor ABSALON ORTIZ ZAPATA, dejó causado el derecho a sus beneficiarios para gozar de la pensión de sobrevivientes, **ii)** en caso de dejarse causado el mismo, se analizará la calidad de beneficiaria de la señora BLANCA NURY LONDOÑO CASTRILLÓN y el reconocimiento pensional; **iii)** y, por último, la procedencia o no de los intereses moratorios o en subsidio la indexación.

#### ***i. Causación del derecho.***

En principio debe decirse, que la normatividad aplicable al caso que nos convoca, es la consagrada en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificada por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, el cual expresa que será beneficiario de la pensión de sobreviviente el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, que acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte, **siempre y cuando**, el afiliado hubiere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Con respecto a este requisito de semanas, de la historia laboral incorporada al expediente digital, se observa que el afiliado ABSALON ORTIZ ZAPATA, no reunió las 50 semanas exigidas en los 3 últimos años anteriores a su fallecimiento, toda vez que tan solo cotizó del 10 de mayo de 2011 al mismo

---

<sup>6</sup> Folios 51 a 57

<sup>7</sup> Hija de la demandante

<sup>8</sup> Folios 104 y 105

día y mes de 2014, un total de **13 semanas**, debiendo precisarse que en la historia laboral se presenta un gran vacío de cotizaciones entre el 1° de abril de 2010 en donde se presentó la novedad retiro, retomando las cotizaciones para el mes de febrero de 2014.

En lo que respecta al principio de la condición más beneficiosa, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencia 38674 del 25 de julio de 2012, para dar aplicación a los principios de universalidad y proporcionalidad, al igual que darles validez a las cotizaciones realizadas por los afiliados bajo la normatividad anterior, es decir, a lo previsto en la ley 100 de 1993, extendió el principio de condición más beneficiosa, el cual sólo era aplicable de ley 100 al decreto 758 de 1990, para los afiliados fallecidos en vigencia de la ley 797 de 2003, dándole plena aplicación a lo consagrado en la ley 100 de 1993.

Como requisitos para la aplicación de este principio trazó para los afiliados que estando cotizando al sistema, debían acreditar 26 semanas en cualquier tiempo al producirse la muerte, o no estando cotizando, acreditaran 26 semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, **de igual forma exigió**, que a la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003, es decir, 29 de enero de 2003, contaran con un mínimo de 26 semanas cotizadas en el último año, señalando esta Alta Corte en sentencias SL7275-2015, SL4559-2019, SL4987-2019 SL1884-2020, SL4261-2020 y SL1441-2021, que sólo se podría dar aplicación a la norma inmediatamente anterior.

De igual forma, no puede pasar por alto la Sala, que este órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en sentencias SL-2358 y SL-4650 de 2017 y SL5189-2020, exigió que para dar aplicación a la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del 2003, la muerte debió ocurrir entre el 28 de diciembre de 2003 y el 28 de diciembre de 2006.

Respecto a lo anterior, se observa de la historia laboral que milita en el expediente que, el afiliado no cumplió el requisito de semanas exigidas, pues si bien se encontraba cotizando al sistema para el momento de su muerte, reuniendo a creces las 26 semanas en cualquier tiempo, ya que cotizó 737.29, no sucede lo mismo con el otro requisito exigido, toda vez que al efectuar el

estudio de las semanas entre el 29 de enero de 2002 y los mismos día y mes de 2003, este no posee cotizaciones, debiéndose llegar a la misma conclusión del juez de primera instancia, sin ser necesario analizar más elementos.

Ahora, si bien en anteriores oportunidades esta Sala había aplicado la condición más beneficiosa, realizando un salto normativo de ley 797 de 2003 al decreto 758 de 1990, basándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como lo son las sentencias T-566 de 2014 y T-401 de 2015, en aras del respeto de las garantías adquiridas derivadas de la seguridad social. Dicha Corte, en sentencia de unificación SU-005 de 2018, precisó que, si bien se puede dar aplicación a la condición más beneficiosa realizando dicho salto normativo, el mismo se realiza con el fin de proteger los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable, esto quiere decir, que es un caso excepcionalísimo debido a que es una persona que debe tener una mayor protección por parte del Estado.

Así las cosas, esta Sala, ante lo reseñado por la Corte Constitucional, el cual se comparte, se centrará en analizar si la demandante goza de un estado de vulnerabilidad, para ser aplicado dicho salto normativo, debiéndose hacer el respectivo estudio del denominado **test de procedencia**, el cual se compone de 5 condiciones, **cada una necesaria y en conjunto suficientes**, es decir, a falta de uno de ellos se entenderá no superado y no habrá lugar al reconocimiento de la prestación. El test de procedencia comprende las siguientes exigencias:

Test de Procedencia	
Primera condición	Debe establecerse que <b>el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional</b> o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante <b>afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital</b> y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que <b>el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este</b> , de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.



Cuarta condición	Debe establecerse que <b>el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.</b>
Quinta condición	Debe establecerse que <b>el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas</b> o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Así pues, en lo que tiene que ver con la señora BLANCA NURY LONDOÑO CASTRILLÓN, ésta la Sala efectuó una valoración y estudio en profundidad, de cada una de las condiciones trazadas por la Corte Constitucional, para poder determinar si cumple con el test ya mencionado, arrojando el siguiente resultado:

	VALORACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Primera condición	<p>La actora a la fecha de la muerte del causante, contaba con 52 años de edad por lo que no goza de especial protección por su edad; asimismo, no se puede considerar una persona analfabeta, debido al desarrollo de sus estudios de secundaria; por otro lado, tampoco es una persona en situación de desplazamiento ni posee una enfermedad.</p> <p>Sin embargo, si bien no se pudo comprobar una situación de pobreza extrema, si acreditó con los testigos una dependencia absoluta del causante, y aunado a ello, al quedar viuda con 2 hijos, puede ser catalogada como madre cabeza de hogar, pues si bien para el momento de la muerte del afiliado sus hijos VIVIANA MARCELA y JOSÉ MANUEL, ya contaban con 23 y 30 años, respectivamente, siempre fue ama de casa, hasta que tomaron rumbos apartes, tal y como lo expresa el testigo FABIO MARÍN, por lo que para esta Sala se puede catalogar como cabeza de familia para dicha época.</p> <p>Aunado a esto, con los documentos expedidos por el ADRES<sup>9</sup> y el RUAF<sup>10</sup>, esta posee en el acápite de tipo de afiliado, el estado de cabeza de hogar.</p>	X	
Segunda condición	Frente a esta exigencia, se tiene que la demandante no acredita una fuente autónoma de renta, ya que es su hija con la que convive quien la sostiene económicamente, no obstante, señalan los testigos que la labor de la hija, es informal como comerciante, pudiéndose acreditar que la ausencia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, afectaría su mínimo vital.	X	
Tercera condición	Es claro conforme a la prueba testimonial de los señores FABIO ALONSO MARÍN PÉREZ, quien es el cuñado, y CARLOS ARTURO ORTIZ ZAPATA, hermano del causante, los cuales expresan que la demandante convivió con el afiliado fallecido hasta el momento de la muerte, y, asimismo, que ésta dependía económicamente en un todo de él.	X	

<sup>9</sup> Folio 63

<sup>10</sup> Folio 62

Cuarta condición	Se tiene que el causante, estaba cotizando al sistema pensional para el momento de su muerte con el empleador MGL INGENIEROS S.A.S., no obstante, no reunió el número de semanas en los 3 años anteriores a su muerte, para dejar causado el derecho, pudiéndose inferir de los testigos que el señor ABSALON ORTIZ, si bien era maestro de obra, laborando para varias empresas, su labor era esporádica, lo que acredita una circunstancia de imposibilidad en sus cotizaciones, debiéndose advertir que acreditó en toda su vida laboral 737.29 semanas.	X	
Quinta condición	De un estudio exhaustivo de la demanda, su contestación, resoluciones de Colpensiones y el expediente administrativo, debe señalar la Sala que el actuar de la actora fue diligente, pues si bien transcurrió aproximadamente 3 años y 9 meses, para elevar la solicitud pensional, debe observarse que la demandante toda su vida fue ama de casa sostenida económicamente por su cónyuge, existiendo claramente un desconocimiento en las actuaciones para proceder inminentemente con la reclamación administrativa, sumándose a ello, que existe a todas luces una afectación directa de sus necesidades básicas; por lo que debe establecerse que el proceder de la actora, puede ser considerado como diligente.	X	

Conforme a lo anterior, al cumplirse con el test de procedibilidad, es dable aplicar el principio de la condición más beneficiosa en los términos expuesto por la jurisprudencia constitucional, y así poder estudiar el tiempo cotizado antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, esto es, en aplicación de lo establecido en el decreto 758 de 1990, normatividad que establece que el afiliado fallecido haya cotizado 300 semanas al sistema en cualquier tiempo, antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993; o 150 semanas en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de esta misma norma, esto es, entre el 1º de abril de 1988 y el 31 de marzo de 1994 y el mismo número de semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del fallecimiento.

Así pues, una vez revisada la historia laboral del causante, se observa que el señor ABSALON ORTIZ, cumple la primera de las posibilidades, ya que cotizó con anterioridad al 1º de abril de 1994, un total de **538,29 semanas**, por lo que encuentra la Sala que contrario a lo manifestado por el juez de primera instancia, el afiliado fallecido si dejó acreditado el derecho a sus beneficiarios; debiéndose en este sentido **REVOCAR** la sentencia de primera instancia.

*ii. Calidad de beneficiaria de la demandante y reconocimiento pensional.*

Una vez acreditada la causación de la pensión de sobrevivientes, pasa esta Sala al estudio de la calidad de beneficiaria de la actora, quien afirma ser la cónyuge del causante.

Pues bien, para efectos de acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, debemos remitirnos a lo señalado en el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que exige una convivencia de no menos de cinco años anteriores a su muerte.

No se discute que la actora, contrajo matrimonio católico con el afiliado fallecido, el 6 de agosto de 1983; ahora, con relación a la prueba testimonial recibida por los señores FABIO ALONSO MARÍN PÉREZ y CARLOS ARTURO ORTIZ ZAPATA, quienes es cuñado de la actora y hermano del fallecido, respectivamente, señalan que conocen a la demandante desde hace más de 32 años, asegurando que el señor ABSALON ORTIZ y la actora, siempre convivieron juntos sin separación alguna, conformando una familia, afirmando que tienen claridad de ello, debido a su cercanía y visitas constantes que le realizaban a la pareja.

Conforme a las anteriores declaraciones, las cuales gozan de certeza y espontaneidad para la Sala, se puede establecer la existencia de una convivencia por más de 5 años anteriores a la muerte, por lo que se encuentra acreditado por la demandante la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, siendo procedente reconocer dicha prestación económica.

Atendiendo al término trienal de prescripción, debe establecerse este se vio interrumpido por una única vez con el reclamo que la demandante le hiciera a COLPENSIONES el **14 de febrero de 2018**; prescripción que fue suspendida hasta tanto se agotara la reclamación administrativa, esto es, el 39 de mayo del mismo año, momento para el cual le fue notificada la resolución DIR 9732 de 2018 (por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación). Y es a partir de este momento que se contabiliza el termino trienal de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que la actora contaba hasta el mismo día y mes de 2021, para presentar la demanda

sin que se vieran afectadas las mesadas pensionales causadas, la cual se interpuso el 28 de enero de 2019.

Así las cosas, solo se verán afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción todas aquellas mesadas pensionales causadas con anterioridad al **14 de febrero de 2015**, esto es, 3 años anteriores a la fecha en que se elevó la solicitud pensional.

Procedió entonces esta Sala a realizar la liquidación respectiva, teniendo en cuenta un salario mínimo para cada época, del **14 de febrero de 2015 al 31 de marzo de 2023**, lo cual arroja un retroactivo pensional por valor de **\$86'587.179**.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total, Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	11,5	\$ 644.350	\$ 7.410.025
2016	5,75%	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13,12%	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023		3	\$ 1.160.000	\$ 3.480.000
			TOTAL	\$ 86.587.179

A partir del 1º de abril del año en curso, **COLPENSIONES** seguirá reconociendo y pagando a la señora **BLANCA NURY LONDOÑO CASTRILLÓN** una mesada pensional no inferior al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, tanto en las mesadas ordinarias, como en la adicional de diciembre, con los respectivos incrementos anuales aprobados por el Gobierno Nacional.

Hay que advertir que, al ser otorgada la pensión en favor de la demandante, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 143 de la ley 100 de 1993, la cotización para salud de los pensionados, quienes son afiliados obligatorios a este sistema en el régimen contributivo, tal como lo determina la misma ley en el artículo 157 y 203, se encuentra en su totalidad a cargo de aquéllos. Y es por ello, que el pensionado está en la obligación de realizar los aportes a

salud desde el momento mismo en que ostenta el estatus de pensionado, siendo esta una disposición inherente al otorgamiento de la pensión y legalmente obligatoria, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en especial en sentencia 47528 del 6 de marzo de 2012.

Por tal razón, se **AUTORIZA** a Colpensiones a realizar los respectivos descuentos en salud sobre las mesadas pensionales ordinarias reconocidas a la demandante.

**iii. Intereses moratorios o indexación.**

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, que en principio deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas. Lo anterior, por cuanto se trata simplemente de una medida resarcitoria.

No obstante, en el presente caso la pensión de sobrevivientes fue reconocida en aplicación del cambio jurisprudencial mencionado, por lo que la actuación de COLPENSIONES para negar tal prestación no fue arbitraria ni injustificada, sino que obedecía a un criterio jurisprudencial, por lo que en esa medida no hay lugar a los intereses moratorios. Por tal razón habrá de **CONFIRMARSE** la sentencia revisada en este sentido.

Sin embargo, como en la demanda fue solicitada la indexación, es indudable que la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano es un hecho notorio, pues cuando un pago no se hace en la fecha de su exigibilidad el mismo comienza a depreciarse y la indexación o revaluación judicial es el mecanismo apropiado para combatir ese defecto.

En virtud de lo anterior, se accederá al reconocimiento de la indexación, **CONDENÁNDOSE** a COLPENSIONES a indexar las mesadas pensionales,

tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, entre la causación de cada una y hasta el momento efectivo del pago.

**iv. Costas procesales.**

En innumerables providencias se ha dejado claro que nuestra ley procesal, ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que sólo basta con el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena, y en el presente caso, COLPENSIONES fue el único vencido.

Así pues, en atención a la revocatoria íntegra de la sentencia y a lo establecido en el numeral 4° del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas procesales de las dos instancias corren por cuenta de la demandada y en favor de la parte actora. Las agencias en derecho de la segunda instancia se fijan en la suma de \$1'160.000 a favor de la parte actora.

Corolario de todo lo anterior, es que la sentencia de primera instancia deberá ser **REVOCADA** en su integridad.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Se **REVOCA** íntegramente la sentencia que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocida.

**SEGUNDO:** Se **DECLARA** que la señora **BLANCA NURY LONDOÑO CASTRILLÓN** tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes en aplicación de la condición más beneficiosa bajo el decreto 758 de 1990.

**TERCERO:** Se **CONDENA** a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante por concepto de retroactivo pensional comprendido del 14 de febrero de 2015 al 31 de marzo de 2023, la suma de **\$86'587.179**.

**CUARTO:** Se **CONDENA** a COLPENSIONES a que, a partir del **1º de abril de 2023**, siga reconociendo y pagando a la demandante una mesada pensional no inferior al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, tanto en las mesadas ordinarias como en la adicional de diciembre, con los respectivos incrementos anuales aprobados por el Gobierno Nacional.

**QUINTO:** Se **CONDENA** a COLPENSIONES a indexar las sumas adeudadas por retroactivo pensional, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, entre la causación de cada mesada pensional y hasta el momento efectivo del pago.

**SEXTO:** Se **AUTORIZA** a COLPENSIONES a realizar los descuentos en salud sobre las mesadas pensionales ordinarias.

**SÉPTIMO:** Costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,

  
**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**

  
**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

  
**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**





**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTE</b>	Blanca Nury Londoño Castrillón
<b>INTERVINIENTE</b>	Viviana Marcela Ortiz Londoño
<b>DEMANDADO</b>	Colpensiones
<b>RADICADO</b>	<b>05-001-31-05-009-2019-00036</b>
<b>DECISIÓN</b>	Revoca sentencia
<b>MAGISTRADO PONENTE</b>	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**  
Fijado el 16 de marzo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**  
Se desfija el 16 de marzo de 2023 a la 5:00 pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO